



REPÚBLICA DE COLOMBIA



**CNSC**  
COMISIÓN NACIONAL  
DEL SERVICIO CIVIL  
Igualdad, Mérito y Oportunidad

**RESOLUCIÓN No 6557 DE 2020**  
05-06-2020



20202230065575

**“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”**

**EL DESPACHO DE CONOCIMIENTO**

En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 130 de la Constitución Política y, en especial, las consagradas en la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005, la Ley 1437 de 2011, el Acuerdo No. CNSC 555 de 2015 y el Acuerdo No. CNSC 20181000004656 de 2018, y

**CONSIDERANDO:**

**1. Antecedentes**

De conformidad con el artículo 11, literales c) e i), de la Ley 909 de 2004, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNSC, entre otras funciones, *“Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento” (...)* y *“Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate para tal fin”*.

En observancia de la citada norma, la CNSC expidió el Acuerdo No. 20181000004656 del 14 de septiembre de 2018, *“Por el cual se establecen las reglas del Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la GOBERNACIÓN DE RISARALDA “Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”*.

En aplicación del artículo 30 de la Ley 909 de 2004, la CNSC suscribió con la Universidad Libre, el Contrato No. 575 de 2018, con el objeto de *“Desarrollar el proceso de selección para la provisión de empleos vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa de algunas entidades de los departamentos de Risaralda, Caldas, Meta, Huila y Vichada, desde la etapa de verificación de requisitos mínimos hasta la consolidación de la información para la conformación de lista de elegibles”*.

Concluidas las Etapas de Inscripciones, de Verificación de Requisitos Mínimos y de aplicación de Pruebas, con sus respectivas reclamaciones, de este proceso de selección, se publicaron los resultados definitivos de cada una de las pruebas aplicadas a quienes concursaron por el empleo al cual el aspirante JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9993009, fue admitido, procediendo la CNSC a conformar y adoptar, en cumplimiento del artículo 49 del precitado Acuerdo de la Convocatoria, en concordancia con lo previsto en el numeral 4º del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, la correspondiente Lista de Elegibles mediante la Resolución No. 20202230044245 del 10 de marzo de 2020, en los siguientes términos:

**ARTÍCULO PRIMERO.** Conformar y adoptar la Lista de Elegibles para proveer UN (1) vacantes del empleo denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 1, identificado con el Código OPEC No. 16453, del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Gobernación de Risaralda, ofertado con el Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente, así:

| Posición | Tipo Documento | No. Documento | Nombres         | Apellidos                 | Puntaje |
|----------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------|
| 1        | CC             | 1048847027    | LADY NADINE     | CASTELBLANCO CASTELBLANCO | 71.35   |
| 2        | CC             | 9993009       | JORGE ENRIQUE   | CARMONA GONZALEZ          | 68.12   |
| 3        | CC             | 79618836      | JAVIER GUSTAVO  | GUERRA GONZALEZ           | 66.99   |
| 4        | CC             | 41961792      | CLAUDIA LILIANA | VILLAMIL RINCÓN           | 64.26   |
| 5        | CC             | 1094901610    | DIANA CAROLINA  | GONZALEZ SEPULVEDA        | 58.76   |

**“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”**

## 2. Competencia y oportunidad para solicitar la exclusión de la Lista de Elegibles

Publicada la referida Lista de Elegibles el 11 de marzo de 2020, la Comisión de Personal de la Gobernación de Risaralda, mediante radicado interno No. 299903874 del 12 de marzo de 2020, presentó solicitud de exclusión de dicha lista del aspirante JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, cumpliéndose los requisitos de competencia y oportunidad establecidos en el artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, por el que se reglamentan los procedimientos a surtir ante y por la CNSC, para realizar esta solicitud:

**ARTÍCULO 14.** Dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la Lista de Elegibles, la Comisión de Personal de la entidad u organismo interesado en el proceso de selección o concurso podrá solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la Lista de Elegibles de la persona o personas que figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera de los siguientes hechos:

- 14.1. Fue admitida al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la convocatoria.
- 14.2. Aportó documentos falsos o adulterados para su inscripción.
- 14.3. No superó las pruebas del concurso.
- 14.4. Fue suplantada por otra persona para la presentación de las pruebas previstas en el concurso.
- 14.5. Conoció con anticipación las pruebas aplicadas.
- 14.6. Realizó acciones para cometer fraude en el concurso.

Los argumentos expuestos por la Comisión de Personal de la Gobernación de Risaralda en su solicitud de exclusión, son los siguientes:

La experiencia que aporta es de técnico administrativo y no como profesional por lo que no cumple con la experiencia profesional relacionada, según lo requerido en el manual de funciones de la entidad y en la oferta OPEC.

## 3. Competencia de la CNSC para resolver la solicitud de exclusión de la Lista de Elegibles

El artículo 130 de la Constitución Política establece que la CNSC es la “(...) responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial”, norma que desarrolla el artículo 7 de la Ley 909 de 2004.

Con este fin, el artículo 12, literales a) y h), de la Ley 909 de 2004, le asigna a la CNSC las siguientes funciones de vigilancia de la correcta aplicación de las normas de Carrera Administrativa:

- a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso, suspender cautelarmente el respectivo proceso, mediante resolución motivada;

(...)

- h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de los principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera de los empleados públicos, de acuerdo a lo previsto en la presente ley (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, en relación con la exclusión de aspirantes de las Listas de Elegibles conformadas en los procesos de selección, dispone lo siguiente:

**ARTÍCULO 16.** La Comisión Nacional del Servicio Civil una vez recibida la solicitud de que trata los artículos anteriores y de encontrarla ajustada a los requisitos señalados en este decreto, iniciará la actuación administrativa correspondiente y comunicará por escrito al interesado para que intervenga en la misma.

Analizadas las pruebas que deben ser aportadas por la Comisión de Personal y el interesado, la Comisión Nacional del Servicio Civil adoptará la decisión de excluir o no de la Lista de Elegibles al participante. Esta decisión se comunicará por escrito a la Comisión de Personal y se notificará al participante y contra ella procede el recurso de reposición, el cual se interpondrá, tramitará y decidirá en los términos del Código Contencioso Administrativo.

De las anteriores normas, se deduce la facultad legal de la CNSC para adelantar la presente actuación administrativa.

En consecuencia, en cumplimiento del precitado artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el Auto No. 20202230003504 del 14 de mayo de 2020, “Por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a decidir la solicitud de exclusión de la Lista de Elegibles del aspirante JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, OPEC 16453, del Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”.

**“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”**

#### **4. Comunicación del Auto de inicio de la actuación administrativa de exclusión de la Lista de Elegibles**

Conforme al artículo 2 del referido Auto, el mismo fue comunicado el 18 de mayo de 2020 por la Secretaría General de la CNSC, en los términos del artículo 33 de la Ley 909 de 2004, al correo electrónico del señor JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, concediéndole el término de diez (10) días hábiles para que, en ejercicio de su derecho de contradicción, interviniera en la presente actuación administrativa, los cuales transcurrieron entre el 19 de mayo y el 2 de junio de 2020.

#### **5. Intervención del aspirante en la actuación administrativa de exclusión de la Lista de Elegibles**

Dentro del término anteriormente indicado, el aspirante intervino en la presente actuación administrativa mediante radicados de entrada No. 20206000583602 y 20206000584192 del 27 de mayo de 2020, argumentando principalmente lo siguiente:

(...) Me inscribí para participar en el proceso de convocatoria 652 de 2018 de la Gobernación de Risaralda para el empleo Profesional universitario código 219 grado 1 OPEC 16453 y contemplaba los siguientes requisitos: Título de Formación Profesional dentro del NBC - Administración y doce (12) meses de experiencia profesional relacionada y se establecieron como alternativas las contempladas en los art. 25 y 26 del Decreto 785 de 2005.

En virtud de lo anterior, registré en el aplicativo SIMO:

- Título de **Administrador Público** de la ESAP terminado en el 2011 y la Tarjeta Profesional.
- Título de **Técnico Profesional de Relaciones Industriales** con fecha de terminación en el año de 1999.
- Título de Especialización en **Gestión pública**, otorgado el día 26 de octubre de 2018.

Los documentos registrados indican que reúno los requisitos de formación académica como consta en el siguiente cuadro

(...)

Cuadro tomado de la página SIMO.

Así mismo, para el caso de la experiencia profesional, cargué en el aplicativo SIMO certificado laboral de la Entidad Instituto de Movilidad de Pereira donde consta que desempeño funciones como Técnico Administrativo en el área de talento humano, propiamente en el manejo de la nómina desde el 02 de mayo de 1997 tal como se muestra a continuación:

(...)

No obstante, la Gobernación de Risaralda presentó ante esta CNSC solicitud de exclusión argumentando lo siguiente: (...) *La experiencia que aporta es de técnico administrativo y no como profesional por lo que no cumple con la experiencia profesional relacionada, según lo requerido en el manual de funciones de la entidad y en la oferta OPEC.(...)*<sup>1</sup>

Ahora bien, el Decreto 785 de 2005 en el Artículo 11 señala:

*ARTÍCULO 11. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.*

*Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente.*

**Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pñsum académico de la respectiva formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo.**

**Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio.** (negrilla y subraya intencional)

Lo anterior indica, que la experiencia profesional para mi caso es a partir de la obtención del título Tecnología en Gestión del Talento Humano obtenido a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Respecto a la experiencia relacionada, cabe señalar que el certificado laboral que registre en el aplicativo SIMO describe funciones realizadas y tienen relación con las descritas para el empleo en el cual me postule.

De esta manera, es importante precisar que, si bien es cierto que el cargo en el cual me desempeño en la entidad es de nivel técnico, también lo es que tengo un título de formación Técnico Profesional y la norma es clara al fijar que se considera experiencia profesional, esto es, la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, tecnológica o técnica profesional, sin otra condición. Por lo que carece de fundamento el argumento presentado por la Gobernación de Risaralda para solicitar

<sup>1</sup>Oficio No. 20203010404851 del 15 de mayo de 2020.

**“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”**

mi exclusión de la lista de elegible No. 20202230044245 del 10 de marzo de 2020, publicada en la página web de la CNSC el 11 de marzo del año en curso.

Igualmente, en el Artículo 25 indica:

**ARTÍCULO 25.** *Equivalencias entre estudios y experiencia. Las autoridades territoriales competentes, al establecer el manual específico de funciones y de requisitos, no podrán disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, ni exceder los máximos señalados para cada nivel jerárquico. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias:*

25.1 Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional:

25.1.1 El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

25.1.1.1 Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional. (Negrilla y subrayado fuera de texto.)

Verificada la norma expuesta y atendiendo además lo establecido como alternativa en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la Gobernación de Risaralda OPEC 16453, registré en el aplicativo SIMO título de posgrado en la modalidad de especialización en Gestión Pública. Lo anterior significa que la Entidad no puede alegar incumplimiento a las exigencias contenidas en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales.

Así las cosas, no le asiste razón a la Gobernación de Risaralda pues carece de argumentos normativos para solicitar mi exclusión de la lista de elegible, toda vez que las pruebas relacionadas demuestran el lleno de los requisitos determinados para el empleo Profesional universitario código 219 grado 1 OPEC 16453 (Sic).

## 6. Fundamentos jurídicos para la decisión

En primer lugar, se debe resaltar que el numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, establece que la convocatoria, como una etapa del proceso de selección para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera administrativa, “(...) es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes” (subrayado fuera de texto), precepto sobre el que se ha pronunciado favorablemente la Corte Constitucional en diferentes sentencias, entre las cuales se pueden destacar las Sentencias SU-913 de 2009, SU-446 de 2011, T-829 de 2012 y T-180 de 2015. Específicamente, en la Sentencia SU-913 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, dicha corporación manifestó:

(...) En relación con la etapa de convocatoria, la sentencia T-256 de 1995 concluyó que “Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del concurso (...) incurre en violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de aquélla” (Subrayado fuera de texto).

En la misma línea jurisprudencial, en la Sentencia SU-446 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, expresó:

Por tanto, si lo que inspira el sistema de carrera es el mérito y la calidad, son de suma importancia las diversas etapas que debe agotar el concurso público. En las diversas fases de éste, se busca observar y garantizar los derechos y los principios fundamentales que lo inspiran, entre otros, los generales del artículo 209 de la Constitución Política y los específicos del artículo 2 de la Ley 909 de 2004 (...). La sentencia C-040 de 1995 (...) reiterada en la SU-913 de 2009 (...), explicó cada una de esas fases, las que por demás fueron recogidas por el legislador en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (...).

(...)

Dentro de este contexto, la convocatoria es, entonces, “la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las reglas de obligatoria observancia para todos, entendiéndose administración y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes (...).

**“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”**

(...)

Es indiscutible, entonces, que las pautas del concurso son inmodificables y, en consecuencia, a las entidades no le es dado variarlas en ninguna fase del proceso, por cuanto se afectarían principios básicos de nuestra organización, como derechos fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular (Subrayados fuera de texto).

En los mismos términos se pronunció en la Sentencia T-829 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub:

Es preciso tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (...), la convocatoria es norma reguladora de todo concurso y a ella quedan obligados tanto la Comisión Nacional del Servicio Civil como la entidad que convoca el concurso y todos los participantes (Subrayado fuera de texto).

Y más recientemente en la Sentencia T-180 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio:

La convocatoria se convierte en una expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como para inscritos, de tal forma que incumplir las directrices allí estipuladas contraviene no solo los derechos de los aspirantes, sino aquel valor superior al cual está sujeto toda actuación pública. Dicho en otros términos, el acto administrativo que la contenga funge como norma del concurso de méritos, por lo cual todos los intervinientes en el proceso deben someterse aquel so pena de trasgredir el orden jurídico imperante.

(...)

El concurso público ha sido el mecanismo establecido por la Carta Política para que en el marco de una actuación imparcial y objetiva (...), haga prevalecer al mérito como el criterio determinante para proveer los distintos cargos en el sector público. Su finalidad es que se evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo (...).

Dicha actuación debe estar investida con todas las ritualidades propias del debido proceso (...), lo que implica que se convoque formalmente mediante acto que contenga tanto de (sic) los requisitos exigidos para todos los cargos ofertados, como de (sic) las reglas específicas de las diversas etapas del concurso (...) a las que se verán sometidos los aspirantes y la propia entidad estatal (...). Sobre el particular, este Tribunal señaló en la Sentencia SU-913 de 2009 que:

- (i) Las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables (...).
- (ii) A través de las normas obligatorias del concurso, la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada.
- (iii) Se quebranta el derecho al debido proceso y se infringe un perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fe (...).

(...)

En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha expresado de manera uniforme y reiterada que los concursos – en tanto constituyen actuaciones adelantadas por las autoridades públicas – deberán realizarse con estricta sujeción (i) al derecho al debido proceso; (ii) al derecho a la igualdad y (iii) al principio de la buena fe (...). Dicha obligación se traduce, en términos generales, en el imperativo que tiene la administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del concurso ya que aquellas, como bien lo ha sostenido esta Corporación, constituyen “ley para las partes” que intervienen en él (...) (Subrayados fuera de texto).

A su vez, el Consejo de Estado, Sección Primera, en Sentencia del 17 de febrero de 2011, M.P. María Elizabeth García González. Ref. 2010-03113-01, se pronunció así:

El concurso de méritos ha sido considerado el instrumento más idóneo y eficaz, para determinar las aptitudes de los aspirantes a un cargo. Además de los principios que lo inspiran, entre ellos, el mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, la ejecución de sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso y respetar todas y cada una de las garantías que rodean el proceso de selección (Subrayado intencional).

(...) De este modo, frente a la vulneración del debido proceso administrativo, entendido como *“la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”*.

Sobre la finalidad de los concursos de méritos para proveer cargos de carrera administrativa, la Corte Constitucional en Sentencia C-533 de 2010, señaló:

**“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”**

Como lo ha expresado la jurisprudencia, [s]e debe recordar que la finalidad misma de la carrera administrativa es reclutar un personal óptimo y capacitado para desarrollar la función pública. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de los fines estatales, la carrera permite que quienes sean vinculados a la administración bajo esta modalidad, ejerzan de manera calificada la función pública que se les asigna, ya que dicho sistema está diseñado para que ingresen y permanezcan en él aquellas personas que tengan suficientes calidades morales, académicas, intelectuales y laborales para asumir con eficiencia y honestidad dicho servicio. Existe entonces una estrecha relación entre el cumplimiento de los fines del Estado y la prioridad que el constituyente otorga a la carrera administrativa, que se explica en la naturaleza del sistema y en los principios que lo fundan (Subrayado fuera de texto).

Por otra parte, el artículo 11 del Decreto Ley 785 de 2005, define los siguientes términos:

**ARTÍCULO 11. Experiencia.** Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.

Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente.

(...)

**Experiencia Profesional.** Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo.

**Experiencia Relacionada.** Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio.

Ahora bien, el artículo 19 del Acuerdo de Convocatoria indicó que la Experiencia se debía certificar así:

**ARTÍCULO 19°. CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA.** La experiencia se acreditará mediante la presentación de certificados escritos, expedidos por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o privadas.

Para validar la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación de materias deberá adjuntarse la certificación expedida por la institución educativa, en que conste la fecha de terminación y la aprobación de la totalidad del pénsum académico. En caso de no aportarse, la misma se contará a partir de la obtención del título profesional. Para el caso de los profesionales de la salud e ingenieros se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 del presente Acuerdo.

Los certificados de experiencia en entidades públicas o privadas, deben indicar de manera expresa y exacta:

- a) Nombre o razón social de la empresa que la expide.
- b) Empleo o empleos desempeñados con fecha de inicio y terminación para cada uno de ellos (día, mes y año), evitando el uso de la expresión actualmente.
- c) Tiempo de servicio como se indica en el numeral anterior
- d) Funciones correspondientes al empleo o empleos desempeñados, salvo que la ley las establezca

En los casos en que la ley establezca las funciones del cargo o se exija solamente experiencia laboral, no es necesario que las certificaciones las especifiquen.

Las certificaciones deberán ser expedidas por el jefe de personal o el representante legal de la entidad o empresa, o quien haga sus veces.

Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma, antefirma legible (Nombre completo) y número de cédula del empleador contratante, así como su dirección y teléfono.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8).

La experiencia acreditada mediante contratos de prestación de servicios, deberá ser soportada con la respectiva certificación de la ejecución del contrato o mediante el acta de liquidación o terminación, precisando las actividades desarrolladas y las fechas de inicio (día, mes y año) y terminación de ejecución del contrato (día, mes y año). No se aceptará la experiencia acreditada cuando sólo se presente la copia del contrato, sin que la misma esté acompañada de los documentos antes mencionados.

Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones (Tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio y de terminación (día, mes y año), el tiempo de dedicación y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento.

**PARÁGRAFO 1º.** Las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación dentro del proceso de selección ni podrán corregirse o complementarse posteriormente. No se deben adjuntar actas de posesión ni documentos diferentes para demostrar la experiencia.

**“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”**

**PARÁGRAFO 2°.** Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente traducidos y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 3269 de 14 de junio de 2016 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

## 7. Análisis probatorio

Se procede, entonces, a realizar un estudio de los documentos aportados por el aspirante en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO, dentro del plazo señalado para cumplir con esta labor en la convocatoria que nos ocupa, lo cual permitirá establecer si procede o no la causal alegada por la Comisión de Personal para excluir al elegible.

Para tal fin, se tendrán en cuenta los requisitos exigidos para el empleo identificado con el código OPEC No. 16453 al cual se inscribió el aspirante, conforme lo prevé el artículo 11 del Acuerdo de Convocatoria. Al verificar en el SIMO esta información, se encuentra lo siguiente:

**Estudio:** Título profesional en las disciplinas académicas de los núcleos básicos del conocimiento (NBC) en: NBC-Economía; NBC-Administración; NBC-Contaduría Pública; NBC- Ingeniería administrativa y afines; Ingeniería Industrial y Afines; otras ingenierías; tarjeta o matrícula profesional en los casos reglamentados por la ley.

**Experiencia:** Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada.

**Alternativa de estudio:** Para la homologación de equivalencias entre estudios y experiencia, la administración departamental de Risaralda, dará cumplimiento a lo establecido en los artículos 25 y 26 del capítulo quinto (V), del Decreto 785 del 17 de marzo de 2005.

**Equivalencia de estudio:** Aplicar las equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Decreto 785 de 2005 y las normas que lo modifiquen o adicionen.

**Equivalencia de experiencia:** Aplicar las equivalencias entre estudios y experiencia, establecidas en el Decreto 785 de 2005 y las normas que lo modifiquen o adicionen (Sic).

Con relación al Propósito y Funciones del empleo, la misma OPEC No. 16453, las define como sigue:

**Propósito:** coordinar los procedimientos de nómina del personal activo y pensionado de la administración central y los aportes que de ella se generan, de acuerdo con la normativa vigente, procedimientos y políticas establecidas.

### Funciones

- Participar en la elaboración de los presupuestos de nómina de los pensionados y del personal activo al servicio de la administración departamental.
- Participar en la ejecución del Plan de Acción y/o programa de trabajo de la dependencia.
- Revisar los actos administrativos de reconocimiento y pagos a favor de funcionarios y ex funcionarios, así como las respectivas novedades que afecten la nómina de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.
- Verificar la capacidad de endeudamiento de los funcionarios de la Administración y validar la información para la autorización de préstamos.
- Validar mensualmente que los aportes parafiscales y de seguridad social de los funcionarios activos y pensionados de la administración central, se hayan liquidado de conformidad con la normativa vigente.
- Revisar y avalar los factores salariales de los funcionarios activos y retirados de la administración departamental para la liquidación de los bonos pensionales de acuerdo con los procedimientos y normatividad vigente.
- Formular y asesorar los proyectos en el área de su competencia y viabilizarlos de acuerdo con la metodología requerida.
- Participar en la formulación y ejecución de políticas públicas, de acuerdo con el área de su competencia.
- Ejecutar actividades tendientes a garantizar la correcta implementación del Sistema de Gestión adoptado en la entidad según el(los) proceso(s) a los cuales pertenezca y cumpliendo los requisitos aplicables y los lineamientos de la Línea Estratégica y la Primera Línea.
- Tramitar oportunamente los documentos, requerimientos de información y correspondencia recibidos, empleando los diferentes instrumentos electrónicos implementados para la gestión de los archivos y comunicaciones oficiales en la Administración Departamental.
- Realizar actividades relacionadas con el proceso pre-contractual, contractual y post-contractual del área de su competencia, bajo los principios de transparencia y equidad y ejercer las supervisiones que le sean asignadas de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- Cumplir con los requerimientos de las políticas, programas y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente, adoptando comportamientos seguros de trabajo y buenas prácticas.
- Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo

**“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”**

- Elaborar y presentar informes sobre los temas de su competencia, con la oportunidad y periodicidad requerida.
- Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo del Departamento, a través de los diferentes instrumentos y directrices definidos por la Secretaría de Planeación Departamental.
- Organizar el 100% de la documentación puesta bajo su responsabilidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión Documental y transferirla oportunamente al archivo central del Departamento.
- Elaborar la nómina de personal activo (Nivel central, Secretaría de Salud y Asamblea Departamental) y coordinar la elaboración de la nómina de los pensionados, aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.
- Elaborar y presentar informes concernientes al área de trabajo con destino a los entes de control, Dirección de Contabilidad, Dirección de Presupuesto y demás dependencias que lo requieran con la oportunidad y periodicidad requerida.
- Aportar al fortalecimiento de las herramientas informáticas a través del registro y flujo de la información que sea definida como relevante para la gestión estratégica del área funcional.
- Participar en la ejecución del plan de acción y programa de trabajo de la dirección, en el área de trabajo puesta bajo su responsabilidad.

En atención al argumento de exclusión expuesto por la Comisión de Personal y a lo planteado por el aspirante en sus intervenciones, se procede a verificar en el SIMO el documento con el cual la Universidad Libre, como operador del concurso para la Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos, consideró que el aspirante acreditaba el requisito mínimo de Experiencia para acceder al empleo al cual se inscribió, así:

- Certificación expedida por el Instituto de Movilidad de Pereira, del 13 de noviembre de 2018, en la cual se indica que el aspirante “presta<sup>2</sup>” sus servicios desde el 2 de mayo de 1997, en el cargo de Técnico Administrativo, con un contrato a término indefinido. Con esta certificación laboral el aspirante acredita veintiún (21) años y seis (6) meses de Experiencia.

Al verificar el documento, se evidencia que el aspirante adquirió la experiencia en una entidad pública que se rige por una nomenclatura específica, la cual ubica a dicho empleo en el Nivel Técnico, nivel jerárquico que, de conformidad con el artículo 4, numeral 4, del Decreto 785 de 2005, “Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología”, las cuales son de naturaleza diferente a las funciones propias de los empleos del Nivel Profesional, que según el numeral 3 de la norma precitada, “Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que según su complejidad y competencias exigidas les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales”.

En este sentido, pese a que las funciones del cargo de Técnico Administrativo que desempeñó el aspirante en el Instituto de Movilidad de Pereira, tienen que ver con el apoyo de tareas de nómina, que es el énfasis del empleo denominado Profesional Universitario para el cual concursó, en atención a la jerarquía de los niveles a los cuales pertenecen ambos empleos, las actividades ejecutadas en el primero, como lo describen las citadas normas, denotan una marcada diferencia con las funciones del empleo a proveer.

A lo anterior, se suma el hecho que en la OPEC específicamente se indicó dentro de los requisitos mínimos para acceder al empleo, que el aspirante debía acreditar Experiencia Profesional Relacionada, por ser un empleo del Nivel Profesional, por lo que, no hay cabida a Experiencia solamente Relacionada.

Por otro lado, al revisar el título de Administrador Público aportado por el aspirante, encontramos que obtuvo el mismo en el año 2011, es decir, que durante 14 años desempeñó las funciones del empleo sin contar con un título profesional, por lo que la sola obtención del mismo, no convierte la experiencia obtenida con posterioridad a su obtención, en Experiencia Profesional Relacionada.

<sup>2</sup> Ante la ausencia de una fecha de terminación del vínculo laboral del aspirante, ha de entenderse como fecha última de vinculación, la de expedición de la certificación, toda vez que al menos se tiene certeza de que para esa fecha aún se encontraba laborando en dicha entidad.



**“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”**

Sobre el tema puntual, el Departamento Administrativo de la Función pública<sup>3</sup> se pronunció en el siguiente sentido:

¿Podría tomarse como experiencia relacionada, para acceder a un cargo en el nivel profesional la realizada por el técnico en el ejercicio de las labores (...)?

#### **FUENTES FORMALES Y ANÁLISIS**

Sobre el tema consultado, esta Dirección Jurídica se permite reiterar la posición expuesta mediante el radicado No. 20146000150261 del 16 de octubre de 2014, en los siguientes términos:

En este orden de ideas la experiencia profesional se adquiere en el ejercicio de las actividades propias de la profesión y se contabiliza una vez se terminan y aprueban todas las materias del pensum académico de la profesión respectiva. Así entonces, la experiencia relacionada es la adquirida en el desempeño de empleos con funciones similares al cargo a proveer, y tal experiencia será acreditada en el ejercicio de las actividades propias de la profesión exigida para el desempeño del empleo del cargo a proveer.

**Por lo tanto, debe expresarse que la experiencia adquirida en el ejercicio del empleo del nivel Técnico, así se cuente con la aprobación del respectivo pensum académico de una formación profesional no es experiencia profesional, pues la naturaleza general de las funciones del empleo del nivel Técnico y de Profesional son diferentes** (Énfasis fuera de texto).

Ahora bien, respecto a la intervención del aspirante en la que señala que al no contar con el requisito mínimo de doce (12) meses de Experiencia Profesional Relacionada que exige el empleo a proveer, cuenta con título de posgrado como Especialista en Gestión Pública, el cual le otorga una Experiencia Profesional de dos (2) años, en aplicación de la respectiva Equivalencia contemplada en el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la entidad, se resalta que le asiste razón, puesto que el artículo 25 del Decreto 785 de 2005, establece:

**ARTÍCULO 25.** (...) de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias:

#### **25.1 Para los empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y Profesional:**

**25.1.1** El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

**25.1.1.1** Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional (Subrayado fuera de texto).

Sin embargo, se reitera que el empleo a proveer exige Experiencia Profesional Relacionada, no solamente Experiencia Profesional.

Teniendo en cuenta que el aspirante no aportó en el SIMO otras certificaciones labores para este proceso de selección, se concluye, entonces, que el señor **JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ**, **NO CUMPLE** con el requisito mínimo de Experiencia para acceder al empleo identificado con el código OPEC No. 16453, denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 1, ofertado en el Proceso de Selección No. 652 de 2018 - Convocatoria Territorial Centro Oriente, razón por la cual se considera procedente la exclusión solicitada por la Comisión de Personal de la Gobernación de Risaralda.

En mérito de lo expuesto, y teniendo en cuenta que mediante el Acuerdo No. CNSC 555 de 2015, se dispuso que es función de los Despachos de los Comisionados, adelantar las actuaciones administrativas tendientes a decidir la exclusión de los elegibles, en desarrollo de los procesos de selección que tiene a su cargo, y proferir los correspondientes actos administrativos,

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Excluir a **JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 9993009, de la Lista de Elegibles conformada y adoptada mediante Resolución No. 20202230044245 del 10 de marzo de 2020, para proveer una (1) vacante del empleo identificado con el Código OPEC No. 16453, denominado Profesional Universitario, Código 219, Grado 1, ofertado en el Proceso de Selección No. 652 de 2018 - Convocatoria Territorial Centro Oriente, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo.

<sup>3</sup> SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. Encargo de empleados del Nivel Técnico en empleo del Nivel Profesional. Viabilidad de tener en cuenta la Experiencia Relacionada adquirida en el Nivel Técnico. Radicación No. 20142060178802 del 23 de octubre de 2014.

**“Por la cual se concluye la actuación administrativa tendiente a decidir la procedencia de excluir de la Lista de Elegibles al aspirante JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ, Proceso de Selección No. 652 de 2018 – Convocatoria Territorial Centro Oriente”**

**ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar** el contenido de la presente Resolución a **JORGE ENRIQUE CARMONA GONZALEZ**, al correo electrónico [jcarmona@transitopereira.gov.co](mailto:jcarmona@transitopereira.gov.co), teniendo en cuenta que existe autorización expresa para la utilización de este medio de notificación, en los términos de la Ley 1437 de 2011.

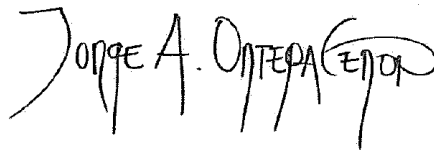
**ARTÍCULO TERCERO.** Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual deberá ser interpuesto ante la CNSC dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO CUARTO. Comunicar** el contenido de la presente Resolución al Representante Legal y a la Comisión de Personal de la Gobernación de Risaralda en la dirección Calle 19 No. 13 – 17 de Pereira (Risaralda) y a los correos electrónicos [jhon.montoya@risaralda.gov.co](mailto:jhon.montoya@risaralda.gov.co), [misael.arroyave@risaralda.gov.co](mailto:misael.arroyave@risaralda.gov.co), [gobernador@risaralda.gov.co](mailto:gobernador@risaralda.gov.co).

**ARTÍCULO QUINTO. Publicar** el presente acto administrativo en la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, [www.cnsc.gov.co](http://www.cnsc.gov.co).

Dada en Bogotá, D.C.,

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**



**JORGE A. ORTEGA CERÓN**  
Comisionado

Aprobó: Johanna P. Benítez Páez – Asesora del Despacho



Revisó: Edwin A. Ruiz Moreno – Gerente Convocatoria Territorial Centro Oriente



Proyectó: Ana Sofía Suárez – Profesional Convocatoria Territorial Centro Oriente

